



5



9



21

EDITORIAL	4
TEMA PÚBLICO	5
CASEN: La Radiografía de la Pobreza en Chile	
CONVERSACIÓN CON IGNACIO IRARRÁZAVAL:	9
"Hay poca información hoy sobre el impacto del gasto social en Chile"	
RADAR	13
Liderazgo Presidencial	
ARTÍCULO INTERNACIONAL	14
Obama y el nuevo sistema de medición de la pobreza	
ENTREVISTA	16
Michael Barber, creador de la Delivery Unit	
COLUMNA	18
Claudio Seebach: Modernización del Estado: Reforzamiento del Centro de Gobierno y la Implementación	
LA COLUMNA DE RICARDO MATTE	19
¿Apurando el freno monetario?	
ESTUDIO	20
Tribunales Superiores Bajo la Lupa	
TEMA PÚBLICO	24
Un Giro en la Política Indígena: Cambios en la Entrega de Tierras	
IN MEMORIAM	26
Manuel F. Ayau	
CONGRESO	27
ACTIVIDADES	29

EDITORIAL

Pocos temas han irrumpido tan fuerte en la agenda pública este año como la entrega de los resultados de la encuesta CASEN 2009 que revelaron que la pobreza en Chile aumentó en los últimos tres años.

En los primeros días, el debate se centró en buscar responsabilidades que explicaran por qué después de años mostrando mejoras sucesivas en las condiciones sociales, se estaba dando pie atrás. La crisis económica mundial, el mayor desempleo, el alza en los precios de los alimentos y políticas sociales mal focalizadas fueron las alternativas que esgrimieron en medio en medio de polémicas de los políticos y los expertos en pobreza.

El debate no ha cesado en las últimas semanas, a medida que se han ido liberando nuevos datos de la CASEN en temas de desigualdad y educación. Para buscar una mirada experta en el tema, Libertad y Desarrollo conversó con Ignacio Irrarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica y coordinador de la comisión encargada de reformular la Ficha de Protección Social. Firmemente convencido de que la clave en la lucha contra la pobreza es potenciar el crecimiento y los empleos, cree también que es necesario darle un espacio a las políticas sociales, pero siempre poniendo el acento en la correcta focalización de ellas y en la necesidad de empezar a medir el impacto que tienen más rigurosamente.

Dado que el tema ha marcado el mes de agosto, incluimos en esta edición un análisis preliminar a las cifras de la CASEN y para una mirada internacional del debate, un artículo escrito en la Heritage Foundation que critica la fórmula que presentó Obama para cambiar la metodología de medición de la pobreza en Estados Unidos.

La visita a Chile de Michael Barber, uno de los creadores del modelo de Delivery Unit que permite entregar a los ciudadanos información sobre el avance de los anuncios y metas gubernamentales, fue una oportunidad para entrevistarlo. Incluimos también una columna de Claudio Seebach, jefe de Coordinación Interministerial de la Secretaría General de la Presidencia, quien está a cargo de implementar esta unidad en Chile.

Finalmente, queremos dar a conocer una versión resumida de un informe preparado por el Programa Justicia de Libertad y Desarrollo que hace una radiografía a los jueces chilenos, de acuerdo a su antigüedad en el cargo, la universidad donde cursaron sus estudios y otros factores.



DIRECTOR REVISTA

Luis Larraín A.

EDITORA

Marily Lüders M.

COMITE EDITORIAL

Denise Couyoumdjian B.
Cristina Cortez C.
Rodrigo Delaveau S.
Hernán Felipe Errázuriz C.
Luis Larraín A.
Alicia Lecaros E.
Marily Lüders M.
Rafael Vicuña E.

DISEÑO Y DIAGRAMACION

Marmota Diseño Integral
www.marmota.cl

FOTOGRAFIA

Emilia Edwards U.
Claudio Gálvez J.
Archivo LyD
Portada: Gentileza de
América Solidaria.

IMPRESION

Quebecor World Chile S.A.

CASEN: La Radiografía de la Pobreza en Chile

Foto: Murettin Kaya

Aunque aumente el gasto social, como sucedió en el período 2006-2009, la superación de la pobreza sólo es posible cuando crece la economía y se crean empleos. En ese sentido, las políticas económicas favorables al empleo y la productividad son las herramientas fundamentales para derrotar la pobreza. Adicionalmente, queda claro que debe trabajarse en una mayor focalización y eficiencia de los programas sociales.

Preocupación ha generado entre los chilenos el recién divulgado aumento en la pobreza. Es la primera vez desde que se realiza la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) que se observa un retroceso en la superación de la pobreza. La Encuesta CASEN reveló que la pobreza afectó a 2.564.032 personas en el año 2009, es decir, hubo 355.095 más personas pobres que en el año 2006.

En los resultados se observa un aumento en la situación de pobreza en todos los grupos de edad, inclusive en la población mayor a 60 años. Además, la mujer continúa presentando una tasa de pobreza mayor a la de los hombres. Esto también sucede con la tasa de desocupación que, en todos los casos, es superior en la mujer.

Para entender qué hay detrás de estos resultados, es necesario destacar que la Encuesta CASEN es el principal instrumento

para el diseño y evaluación de la política social en nuestro país. Esta encuesta entrega información acerca de las condiciones socioeconómicas de los diferentes hogares de Chile.

La Encuesta CASEN ha sido implementada desde el año 1985 con una periodicidad bianual y trianual. Para medir la pobreza, el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) utiliza el método de ingresos o indirecto. Esta metodología ha sido mantenida a lo largo del tiempo, lo que permite la evaluación de la evolución de pobreza¹ y la comparación con otros países. Conceptualmente, la situación de pobreza corresponde a los individuos cuyo ingreso no satisface sus necesidades básicas. En tanto, la situación de indigencia corresponde a las personas cuyo ingreso no satisface sus necesidades alimenticias.

Los resultados muestran que entre 2006 y 2009 hay un incremento de 1,4 puntos porcentuales en la pobreza, al elevarse ésta

Cuadro N°1
EVOLUCIÓN DE LA DIMENSIÓN DE LA INDIGENCIA,
POBREZA Y NO POBRES, 2000 AL 2009

NÚMERO DE PERSONAS Y PORCENTAJE SOBRE LA POBLACIÓN*						
AÑO	INDIGENTES		POBRES**		NO POBRES	
	NÚMERO	%	NÚMERO	%	NÚMERO	%
1990	1.674.736	13,0	4.968.302	38,6	7.902.947	61,4
2000	838.196	5,6	3.038.905	20,2	12.005.179	79,8
2003	726.509	4,7	2.905.424	18,7	12.631.603	81,3
2006	516.738	3,2	2.208.937	13,7	13.914.691	86,3
2009	634.328	3,7	2.564.032	15,1	14.416.312	84,9

VARIACIONES DE PERSONAS Y PORCENTAJE						
AÑO	INDIGENTES		POBRES**		NO POBRES	
	NÚMERO	PTOS. PORCENT.	NÚMERO	PTOS. PORCENT.	NÚMERO	PTOS. PORCENT.
2000/1990	-836.540	-7,4	-1.929.397	-18,4	4.102.232	18,4
2009/2000	-203.868	-1,9	-474.873	-5,1	2.411.133	5,1
2003/2000	-111.687	-0,9	-133.481	-1,5	626.424	1,5
2006/2003	-209.771	-1,5	-696.487	-5,0	1.283.088	5,0
2009/2006	117.590	0,5	355.095	1,4	501.622	-1,4

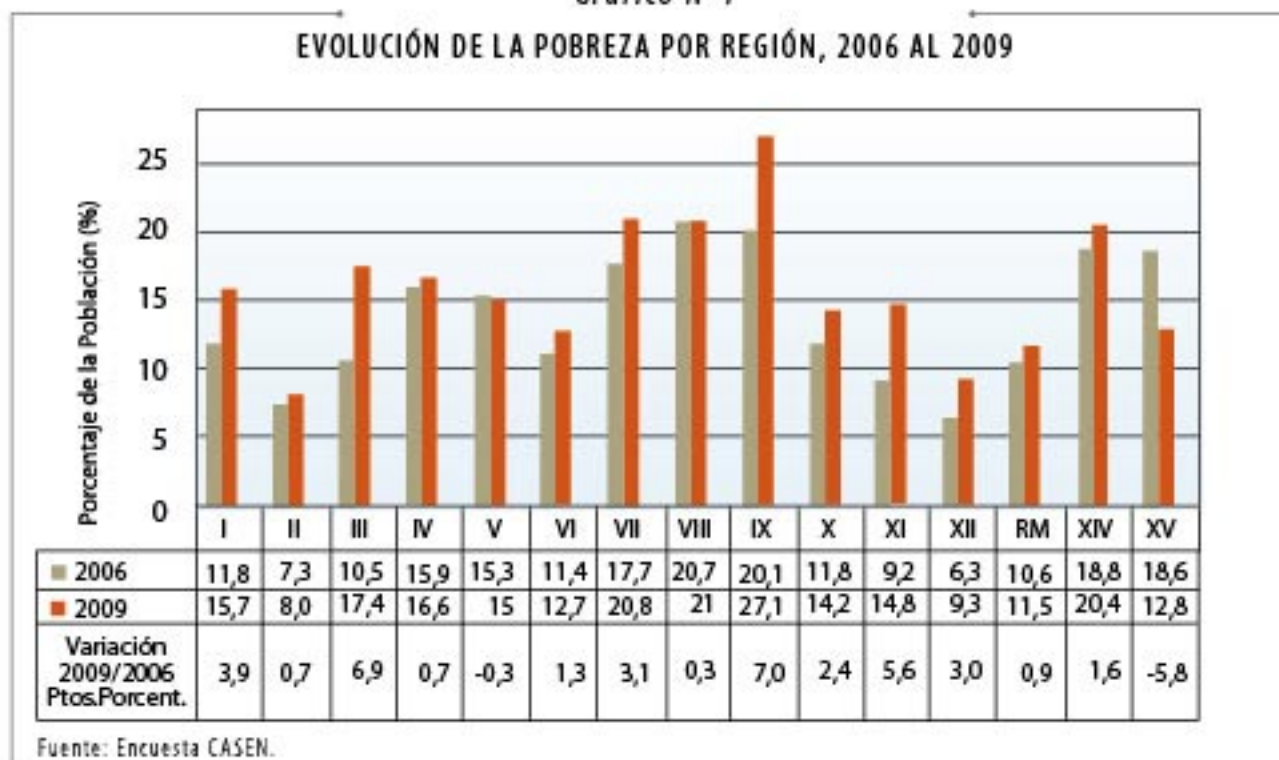
*Se excluye al servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

** Incluye a indigentes y pobres no indigentes.

Fuente: MIDEPLAN, elaborado a partir de información de Encuesta CASEN, años respectivos con factores de expansión en base a CENSO 2002.

Gráfico N°1

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA POR REGIÓN, 2006 AL 2009



desde un 13,7% a un 15,1%. Como se muestra en el Cuadro N° 1, en ese período hubo casi 118 mil más personas indigentes, 355 mil más personas pobres y 501 mil más personas no pobres. Esto último podría considerarse como una cifra positiva, sin embargo, si se compara con períodos anteriores, se observa que este número no alcanza ni a la mitad de las

personas que pasaron a ser no pobres entre 2003 y 2006.

También se observa en el Cuadro N° 1 que la tasa de reducción de la pobreza entre los años 1990 y 2000 es más alta que entre los años 2000 y 2009, ya que en el primer período se reduce la pobreza 18,4 puntos porcentuales

y en el segundo, 5,1 puntos. Similar comportamiento presenta la indigencia o extrema pobreza, ya que entre los años 2000 y 1990 se reduce 7,4 puntos, mientras que entre los años 2000 y 2009 disminuye 1,9 puntos.

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA POBREZA

En relación a las zonas geográficas, en la Encuesta CASEN se confirma el cambio de tendencia observada en el año 2006 (antes del 2006 las zonas rurales eran las más pobres). En el año 2009, la pobreza es menor en las zonas rurales que en las urbanas, 12,9% y 15,5% respectivamente. En cambio, la tasa de indigencia en la zona rural es más alta que en la zona urbana. En el año 2009 la tasa de indigencia en la zona rural es de 4,4% y en la zona urbana es 3,6%.

En cuanto a la evolución de la pobreza entre las regiones del país, durante los años 2006 y 2009 sólo hay una reducción de la pobreza en la Región de Valparaíso (V) y en la Región de Arica y Parinacota (XV). Tal como se muestra en el Gráfico N° 1, estas regiones redujeron la pobreza -0,3 y -5,8 puntos porcentuales respectivamente. También se observa que las regiones que tienen los niveles más altos de pobreza, por sobre el 20% el 2009, son la Región del Maule (VII), Región del Bio-Bio (VIII), Región de La Araucanía (IX) y la Región de los Ríos (XIV). De igual modo, se muestra en el Gráfico N° 1 que los mayores incrementos en la pobreza se presentaron en la Región de Atacama (III) con 6,9 puntos porcentuales y Región de La Araucanía (IX) con un aumento de 7,0 puntos porcentuales.

En relación a la evolución de la indigencia en las regiones del país, se observa que durante los años 2006 y 2009 sólo se reduce la indigencia en la Región de Antofagasta (II) y la Región de los Lagos (X). Estas regiones disminuyeron la indigencia 1,4 puntos porcentuales y 0,4 puntos, respectivamente. De manera contraria, aumenta considerablemente la indigencia en la Región de Atacama (III), pasando de una tasa de 2,8% en el año 2006 a 7,3% en el año

2009. Asimismo, en la Región de la Araucanía (IX) la indigencia pasa de 6,1% el año 2006 a 9,0% el 2009 (Ver Gráfico N° 2).

LA POBREZA POR EDAD, EDUCACIÓN Y SEXO

Con respecto a la situación de la pobreza por grupos de edad, se muestra que la situación de pobreza e indigencia es superior en la población menor a 18 años. En cambio, el grupo de edad que tiene el menor nivel de pobreza son las personas mayores de 60 años. Se observa en el Gráfico N° 3 que todos los grupos aumentan su tasa de pobreza e indigencia entre los años 2006 y 2009, incluso la población mayor a 60 años. Con respecto a este último grupo, este resultado produce sorpresa ya que durante este período existieron diversas iniciativas y programas sociales, tales como la Reforma Previsional, que buscaron proteger de la pobreza justamente al adulto mayor.

En cuanto a la población indígena, se observa que la brecha de pobreza entre la población indígena y no indígena se reduce de 5,7 a 5,1 puntos durante el 2006 y el año 2009. A pesar de esto, la pobreza en la población indígena pasa de un 19,0% en el año 2006 a 19,9% en el 2009. En cambio, la pobreza en la población no indígena pasa de 13,3% a un 14,8% en el mismo período.

Por otra parte, los resultados muestran la fuerte relación que existe entre escolaridad y la situación de pobreza. En el Gráfico N° 4 se observa que los años promedio de escolaridad presentan una evolución positiva entre 1990 y 2009. A pesar de este avance, que debería traducirse en incrementos en la productividad y en mejores empleos, se observan diferencias importantes de acuerdo la situación de pobreza de las personas. En el año 2009, la población en situación de indigencia y pobreza tiene, en promedio, 1,6 años menos de escolaridad que la población no pobre.

Otro resultado a destacar es que las mujeres continúan siendo más pobres que los hombres. Entre los años 2006 y 2009, las

mujeres aumentan su pobreza desde 14,3% a 15,7% y los hombres lo hacen desde 13,0% a 14,5%. Sin embargo, la diferencia en pobreza entre hombres y mujeres se mantiene en 1,2 puntos entre los años 2006 y 2009.

En cuanto al desempleo, se observa una relación significativa entre la tasa de

desocupación y la situación de pobreza. Estas diferencias se acentúan si se comparan hombres con mujeres, siendo estas últimas las que tienen tasas de desocupación más altas. En relación a la población pobre, la tasa de desocupación alcanza los 31,5% en el año 2009. Si esto se compara por sexo, las mujeres pobres tienen una tasa de 35,9% y los

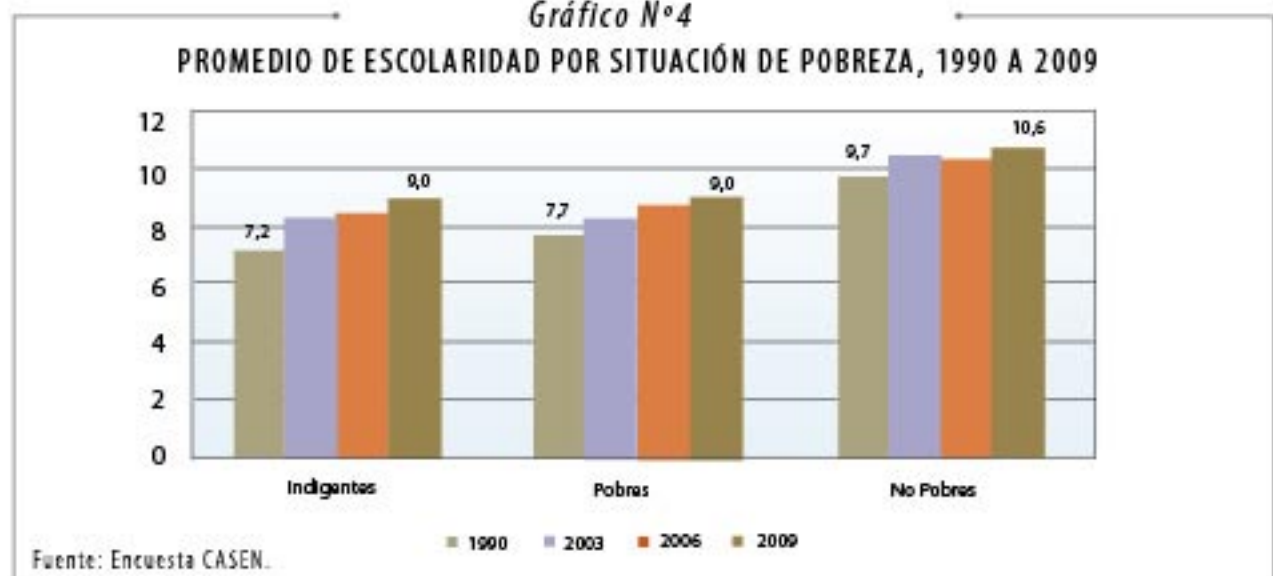
Gráfico N°2



Gráfico N°3



Gráfico N°4



Cuadro N°2
POBREZA, CRECIMIENTO Y DESEMPLEO

AÑO	POBREZA ⁽¹⁾	PIB REAL ⁽²⁾	DESEMPLEO ⁽³⁾
1999/2000	-18,4	6,4%	7,5%
2000/ 2009	-5,1	3,6%	9,0%

(1) Reducción de la pobreza en puntos porcentuales.
(2) Tasa Promedio Crecimiento Real.
(3) Tasa Promedio Desempleo Promedio.
Fuente: Mideplan y FMI.

hombres de 28,7%. En cambio, la población no pobre tiene una tasa de desocupación de 7,9% y si se compara por sexo, las mujeres tienen una tasa de desocupación de 9,8% y los hombres de 6,7%.

Por último, se observa que los hogares en situación de pobreza e indigencia tienen un mayor porcentaje de jefatura femenina que en los hogares que no son pobres. Además, los hogares pobres han presentado un aumento considerablemente en la jefatura femenina. En 1990 el 19,9% de los hogares pobres presentaba jefatura femenina, luego en el año 2009 un 43,2% de los hogares pobres tienen jefatura femenina. Por esta razón, hogares con jefatura femenina son considerados más vulnerables y necesitan apoyo adicional.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Varias explicaciones han sido dadas con respecto al aumento de la pobreza. La primera es que corresponde a un período de menor crecimiento económico y consecuentemente mayor desempleo. Una segunda es que el aumento de los precios de los alimentos hizo que subiera la exigencia de la línea de pobreza. Una tercera es que el gasto social no llegó a los más pobres.

El Cuadro N° 2 ofrece una explicación simple e intuitiva y muestra cuánto ha disminuido la pobreza, cuál ha sido el crecimiento y la tasa de desempleo entre el año 1990 y el 2009, lo que sugiere que buena parte de la pérdida de

eficiencia en reducir la pobreza podría explicarse por menor crecimiento y mayor desempleo.

En parte, este menor crecimiento corresponde a la crisis económica mundial y otra parte se explica por la disminución del ritmo de crecimiento de Chile que venía cayendo fuerte desde antes como consecuencia de la baja en la productividad de la economía. Nuestra economía muestra una preocupante pérdida de su capacidad de crecimiento y, por tanto, la capacidad de disminuir la pobreza. En efecto durante los últimos cuatro años, la productividad cayó en promedio un 1,6% anual.

Un estudio realizado por Larrañaga y Herrera (2008)² encuentra un claro vínculo entre crecimiento económico y la pobreza. Entre los años 1990 y 2006, determina que la caída de 24,9 puntos porcentuales en pobreza se explica en un 71,7% por el efecto crecimiento y un 22,9% por el efecto distribución (con un residuo de 5,4%). Con respecto al empleo, se observa una fuerte relación entre desempleo y pobreza. Esto porque un hogar con un perceptor de ingresos menor cae rápidamente en la pobreza. La menor creación de empleos en el período se explica por la desaceleración del crecimiento de nuestra economía, lo que tuvo efectos regresivos para los hogares de menores ingresos.

En relación con la segunda explicación, que el aumento de los precios de los alimentos hizo que se elevaran las exigencias de la línea de la pobreza, es importante decir que entre el 2006 y el 2009 la inflación de alimentos aumentó aproximadamente un 33% y en ese mismo período la inflación de los bienes no alimentarios creció aproximadamente un 11%. Otro dato interesante es que la última cifra estimada por la FAO de contribución de consumo alimentario en los hogares en Chile es 22,5% (2006). La metodología asume que los hogares pobres consumen la mayor parte de su presupuesto en alimentos, sin embargo, es

cuestionable si este indicador está capturando la realidad que están enfrentando los hogares más necesitados de Chile.

Luego, la tercera explicación que se dio fue que el gasto social no llegó a los más pobres. Durante los últimos 4 años se aumentó considerablemente el gasto social, entre el año 2006 y 2009 se observa un incremento del 30% del gasto social; donde el 45% de este gasto se destinó a la seguridad social y la mayor proporción de esos recursos se destina a los adultos mayores (como se muestra en el Gráfico N° 3 la pobreza en la población mayor a 60 años también aumenta).

Nuevamente esto revela que aunque aumente el gasto social, como sucedió en el período 2006-2009, la superación de la pobreza sólo es posible cuando crece la economía y se crean empleos. En ese sentido, las políticas económicas favorables al empleo y la productividad son las herramientas fundamentales para derrotar la pobreza. Adicionalmente, queda claro que debe trabajarse en una mayor focalización y eficiencia de los programas sociales, de manera que éstos sean efectivos para disminuir la vulnerabilidad de las familias con riesgo de caer en la pobreza. Se ha mencionado que el FOSIS tiene un 35% de gastos de administración, es decir recursos que no llegan a los pobres sino a la burocracia. Se cuestiona también al programa Chile Solidario, que no habría sido efectivo para disminuir la pobreza. Eso es muy posible, porque buena parte de los mayores recursos fueron a mejorar las pensiones y los chilenos más pobres no acceden fácilmente a ese beneficio.

Por esta razón es indispensable evaluar la efectividad de los programas sociales y reasignar los recursos a los programas que realmente obtengan resultados. Esta es una forma objetiva de destinar los recursos a los más pobres y contribuir efectivamente a la reducción de la pobreza. **LyD**

¹ Para que la línea de pobreza sea comparable, la CEPAL actualiza los precios de la canasta de alimentos y con este ajuste es calculada la línea de indigencia. Luego, se aplica un factor multiplicador a la línea de pobreza para determinar las necesidades no alimentarias. En la zona urbana se calcula multiplicando por 2 la línea de indigencia urbana y para calcular la línea de pobreza en zona rural se multiplica por 1,75 la línea de indigencia rural. La selección de los productos de la canasta de alimentos no ha sido actualizada desde su creación y se utiliza la IV Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el INE realizada en el Gran Santiago entre 1987-1988.

² Larrañaga y Herrera (2008). "Los Recientes Cambios de Desigualdad y Pobreza en Chile". CEP, Estudios Públicos, 109.



Ignacio Irarrázaval, Centro de Políticas Públicas de la UC:

“Hay poca información hoy sobre el impacto del gasto social en Chile”

El experto en pobreza analiza a fondo el debate que se ha dado en torno a la CASEN 2009 argumentando que no hay que perder el foco en el crecimiento como manera de superar la pobreza pero que a la vez se debe avanzar en la focalización del gasto social. Sobre la reforma a la Ficha de Protección Social que encabeza y sobre la necesidad urgente de contar con mejor información sobre los grandes programas de ayuda, conversó con Libertad y Desarrollo.

Por estos días, la pobreza copa la agenda de Ignacio Irarrázaval ya que encabeza, a pedido del presidente Piñera, una comisión para proponer reformas a la Ficha de Protección Social. A fines de este mes deberán entregar un informe al Gobierno para que se empiece a trabajar en cambios al sistema de evaluación para acceder a los beneficios sociales.

Hace 5 años Ignacio Irarrázaval pasó de lo

privado a lo académico, cuando llegó desde la consultora Focus al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Pero desde siempre, los temas sociales han marcado el quehacer de este doctor en Política Social del London School of Economics.

Hay bastante consenso en que el alza de la pobreza en Chile que mostró la CASEN 2009 se debió a los efectos de la crisis internacional en la economía, pero también se ha argumentado un gasto social mal

focalizado y otros factores. ¿Cuáles serían las causas para usted de este retroceso en las mejoras sociales chilenas?

Ahora viene un período de hacer el análisis de los microdatos más fino y saber realmente qué pasó con la pobreza, pero viendo la trayectoria de las cifras, ciertamente el tema del alza de precios de los alimentos es una causa y la crisis económica mundial también con el impacto en la caída del producto. Más aún, si se hace un seguimiento sobre qué ha pasado con la tasa de desempleo del INE

desde el 2006 al 2009, se puede observar que ha aumentado sistemáticamente. Aún no tenemos las ponderaciones relativas, pero todo hace plausible que las condiciones macroeconómicas internacionales sean las grandes responsables.

Dicho eso, la pregunta que uno se hace es

decisión política de repartir a toda la sociedad, en un incipiente Estado de Bienestar ?

Están las dos cosas. Cuando pones un umbral tan amplio, por ejemplo, como la pensión básica solidaria, que en 2009 iba al 50% de la población, o Chile Crece contigo que alcanza al 60%. Así, das una señal a los

"Evidentemente, focalizar tiene un costo administrativo, pero también tiene un costo político. Es antipático focalizar, es difícil enfrentar a la opinión pública y reconocer que no hay plata para todos. Cuando se estaba analizando que íbamos hacia un modelo de protección social, ciertamente no había mucha voluntad política para frenar estos beneficios".

si lo podríamos haber hecho mejor como política social. El crecimiento es lo más importante, pero he visto simulaciones que incluso creciendo al 6% al 2020 no vamos a erradicar el 100% de la pobreza, entonces la política social tiene un espacio, aunque crezcamos a tasas altas.

Ahí uno se empieza a cuestionar, ya que las transferencias monetarias en dinero a las familias entre 2006 y 2009 se duplicaron en valor real, un incremento gigante. Pero si analizas cuál es el impacto redistributivo al 40%, al 50% o al 60% más pobres, en cada una de esas líneas de corte se desfocaliza porque cada uno de estos segmentos recibe una proporción inferior del gasto de lo que hacía el 2006.

Con esto, no estoy invalidando la política social de la Presidenta Bachelet porque como aumentó tanto la torta, la tajada que le tocó al 40 ó 50% más pobre fue mucho más grande. Pero a lo mejor sin haber aumentado tanto la torta, podríamos haberle dado una tajada más grande a los que más lo necesitaban.

¿Por qué se desfocalizó el gasto social en los últimos años? ¿Hay falencias en la definición de los beneficiados o una

implementadores de las políticas sociales que la focalización, prácticamente no importa.

Y por otro lado, hemos estado trabajando en el tema de la Ficha de Protección Social (FPS) y, tanto el puntaje como la manera de aplicarlo, no ha sido demasiado estricta. Evidentemente, focalizar tiene un costo administrativo pero también tiene un costo político. Es antipático focalizar, es difícil enfrentar a la opinión pública y reconocer que no hay plata para todos. Cuando se estaba analizando que íbamos hacia un modelo de protección social, ciertamente no había mucha voluntad política para frenar estos beneficios.

Además, en el proceso mismo se han detectado falencias, como por ejemplo, que no hay penalidad para quienes falseen los datos.

Lo que hacen en Estados Unidos y lo que se hace en otros países, se conoce como "means test", pruebas de medios. Se basa en una entrevista con una asistente social y seorean las bases de datos.

Pero en Estados Unidos te dicen: la información que usted provee es valiosa, pero la vamos a verificar. La prueba está en la persona, se pone en ellos la responsabilidad

de presentar la información fidedigna.

Si hay datos que resultan ser falsos tras el chequeo, hay penalidades. En Estados Unidos, se castiga quitando los beneficios: si miente una vez, le suspendemos el beneficio por 3 meses, si miente dos veces, por 1 año y si miente sistemáticamente, puede ser de por vida.

El problema que aparece en el caso de Chile es que los sectores más pobres tienen trabajos informales que no dejan registro en el SII, ni en la banca...

Estamos investigando eso. Hay algunas bases de datos que pueden servir, pero también estamos pensando que en algunos casos puedes aproximarte al revés: ¿pertenece esta persona que está postulando a un subsidio al 40% más rico del país? Si está dentro de ese porcentaje, queda eliminado. Esto puede ser especialmente útil para programas como la pensión básica solidaria, donde no se necesita discriminar entre los beneficiarios.

También hay un riesgo al momento de tratar de focalizar bien el gasto social por parte de los encuestadores, que pueden tener intereses políticos o monetarios en arreglar los puntajes de las familias para que sean incluidas en los programas...

Para evitar las relaciones de colusión, hay un mecanismo para mejorar la capacitación de los encuestadores y está la idea de crear un registro, de manera de que si el encuestador es condescendiente o cambia los datos, le puede costar su puesto.

Hay alguna evidencia que eso ha pasado, pero se puede solucionar con el registro antes mencionado y cambiando un poco la cultura, en el sentido que estás pidiendo acceder a la red de programas sociales del Estado y que la prueba está en tí.

De los grandes programas sociales heredados de la Concertación, ¿cuáles consideras que hay que reformular desde el punto de vista



"Me parece insostenible que tengamos un IMACEC mensual, tasas de ocupación trimestral. Tenemos información mensual de un montón de cosas, ¿y la pobreza cada tres años? Me parece inadmisibles"

de la eficiencia en los próximos años?

Sobre el ChileSolidario, te puedo dar la referencia porque soy parte del Grupo de Política Social (GPS), un grupo académicos donde discutimos las políticas sociales.

Ese proyecto fue una tremenda apuesta que se hizo en el Gobierno de Lagos, en un momento en que se discutía qué tan focalizada era la política social. Yo creo que Lagos fue bien arriesgado al decidir concentrarse en las 250 mil familias indigentes. Fue una apuesta potente en un período donde la pobreza iba cayendo, pero la indigencia estaba estancada en su tasa de disminución.

Era inicialmente buena idea, pero tras recoger evidencia lo que podemos decir con mayor certeza, es que no sabemos es el impacto, lo que por omisión es grave. Hubo problemas metodológicos en el inicio del ChileSolidario al definir los beneficiados. Se tomó como línea de base a algunas familias que ya se estaban interviniendo, no hubo un grupo de control limpio tampoco, entonces, se hicieron algunos supuestos.

Además, las bases de datos tal como están no permiten hacer una evaluación de las diferencias que uno esperaría en una

evaluación sería como se ha hecho en otros países, por ejemplo, en el programa Oportunidades de México. Ese es un caso muy interesante porque se invirtió mucho en una evaluación sistemática y eso ha llevado a que tenga aval político pese a los cambios de Gobiernos.

Pero eso suena bastante común. A raíz de la encuesta CASEN se criticó la focalización de las políticas sociales de la Concertación y no se han revelado datos que muestren la efectividad de las medidas tomadas...

Hay poca información del impacto, pero algo hay. Creo que las estas evaluaciones de la Dirección de Presupuesto (Dipres) han sido súper positivas.

Es importante aclarar que hay varios tipos de evaluaciones para las políticas sociales: De impacto, (con un grupo de control) y de procesos (en base a información secundaria como los gastos y productos). Hasta ahora hay más de las segundas, donde se determina cuánto se ha invertido en un número de prestaciones, pero eso no permite saber si están revirtiendo la pobreza.

Las mejores mediciones de impacto deberían ser, entonces, una de las tareas para el

Ministerio de Desarrollo Social que está desarrollando el Gobierno. ¿Qué expectativas tiene de esta iniciativa?

Primero hay que decir que es una apuesta que está sobre la mesa hace mucho tiempo atrás y hay que ponerlo en ese contexto porque no es un capricho del Gobierno actual. Segundo, yo tengo bastante expectativas pero esto no es una panacea. Va a ser importante separar bien lo que es el diseño y fiscalización, de lo que es la ejecución.

El problema que ha tenido el Mideplan últimamente es que cuando advertía a los otros ministerios sociales (Educación, Salud, Vivienda) que no estaban haciendo bien su labor, éstos podían retrucarle que tampoco lo estaba haciendo bien con ChileSolidario y sus demás programas.

Es importante que en el diseño institucional se separen bien las aguas para que tenga, como tenía Odeplan antes, una cierta tuición sobre las políticas públicas en general. Eso sí, siempre en términos generales, no creo que se deba, por ejemplo, meter a discutir temas curriculares con el Ministerio de Educación, pero puede preguntarle sobre la focalización del plan de alimento escolar o cómo está contrapesando las carencias

“Creo que en Chile, en base a las encuestas, los pobres saben que salir de la pobreza depende de ellos, fuertemente. Los pobres no esperan salir de la pobreza por estas transferencias que se les dan desde el Estado. Eso sí, tienen mucha confianza en la educación como vehículo de movilidad social”.

que tienen los niños vulnerables que se acogen a la subvención preferencial. Ese tipo de preguntas, que son claves, hasta el momento nadie las está haciendo y no hay información básica que debería estar disponible.

Además, aunque soy partidario de lo que hemos avanzado en el sistema de control de gestión de la Dipres, es imposible que tenga una visión agregada de la dimensión de la política social que hoy en día es necesaria. Hay un vacío que este ministerio podría suplir. Dar orientaciones, hacer preguntas importantes como el nivel de focalización, de impacto, los costos de administración.

Hablando del tema de la información disponible para analizar y buscar soluciones a la pobreza, el Ministro Kast planteó que era necesario hacer la CASEN más seguido. ¿Estás de acuerdo? ¿Cada cuánto es razonable considerando los costos porque cada vez son más de mil millones de pesos? Eso también es un tema que ha estado en la tabla hace bastantes años. Yo la haría al menos anual. Me parece insostenible que tengamos un IMACEC mensual, tasas de ocupación trimestral. Tenemos información mensual de un montón de cosas, ¿y la pobreza cada tres años? Me parece insostenible.

Por el tema de costos, se puede aliviar la CASEN. Una muestra de 70 mil hogares es gigantesca, se pueden hacer muestras más chicas. Incluso si fuéramos sensatos y las instituciones conversaran mejor, con la encuesta de ingresos suplementarios del INE, una muestra nacional que

pregunta por ingreso adaptada, no se necesitaría gastar más.

¿Qué otros indicadores que hay en otros países podríamos tener en Chile para tasar mejor los temas sociales?

El más crítico es el ya mencionado, pero también hemos visto en el GPS que se podría mejorar toda la batería de indicadores que se necesitan para la política social como los que miden la pobreza multidimensional o el de movilidad social, que mencionó el Ministro Kast recientemente. Hemos visto, por ejemplo, algunos indicadores muy básicos pero útiles como la relación entre el empleo formal versus el empleo informal, el déficit habitacional, etc.

Para 2011, el gran debate social estará centrado en el Ingreso Ético Familiar. ¿Cómo ve su implementación?

No tengo detalles, pero dado que es una transferencia monetaria, la implementación monetariamente tal no es tan complejo. Por ejemplo, BolsaFamilia, un Chile Solidario en Brasil, se paga vía cajero automático. O puede ser vía la cuenta-RUT del Banco Estado.

Si esta transferencia es condicionada, a que se lleven los niños a los colegios o a los controles de salud, es más complejo pero la experiencia internacional demuestra que el seguimiento es pobre y pocas veces se suspende el beneficio si no se cumplen las exigencias. Eso sirve para generar un cambio cultural. En el caso de México y Honduras, han servido para aumentar la cobertura de la escolaridad.

Una de las cosas interesantes, que supone un

salto cualitativo, es el tema de la gradualidad. Cubrir a la familia hasta la línea de indigencia, pero hay gradualidad de entrada y salida, lo que evita las llamadas trampas de pobreza. Es muy importante que se mantenga esta gradualidad para que a la gente le convenga encontrar trabajo y se va a tener que encontrar equilibrios en los incentivos.

Finalmente, después de años de trabajar en el tema social, ¿cuál es su percepción de los chilenos frente al tema de la pobreza: somos asistencialistas o tenemos fe en nuestra capacidad de salir con nuestro trabajo?

Creo que en Chile, en base a las encuestas, los pobres saben que salir de la pobreza depende de ellos, fuertemente. Los pobres no esperan salir de la pobreza por estas transferencias que se les dan desde el Estado. Eso sí, tienen mucha confianza en la educación como vehículo de movilidad social.

Esto ha funcionado en un escenario de transferencias monetarias bastante bajas. En verdad, es subsidio único familiar, el bono ChileSolidario y los similares, son un porcentaje chico del total de ingresos de las familias pobres. A diferencia de los países desarrollados, nadie puede pensar en vivir de esas transferencias monetarias y eso evita lo que se llama *welfare dependency*, que supone vivir del Estado.

Por lo tanto, ya sea por lo cultural de creer que uno sale por sí mismo, o por lo práctico, que las transferencias no son suficientes para dar el salto, los chilenos saben que la fuerza viene de ellos mismos. **LyD**

Liderazgo Presidencial

A cinco meses de iniciado el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y estando éste desplegado en muchos frentes, surgen algunas inquietudes a partir de encuestas de opinión (CEP y Adimark) que estarían indicando una posible baja en el apoyo a la forma como el Presidente está conduciendo el Gobierno. La aprobación llegaría, según estas encuestas, a valores entre el 45 y el 47%.

Aunque no es posible reconocer una tendencia en estas encuestas, cabe convenir que una apreciación objetiva de la realidad lleva a pensar que es perfectamente posible que ello esté ocurriendo. Las altas expectativas generadas por el nuevo Gobierno, que éste en ningún momento se ha preocupado de moderar, pueden estar enfrentándose con una realidad en que los problemas cotidianos, expresados ya sea en las tarifas del Transantiago, las listas de espera en el sistema público de salud o la precariedad de las soluciones de emergencia para los afectados por el terremoto, continúan sin solución.

Dado lo anterior, resulta de mucha importancia observar cuál es la reacción de las autoridades, en particular el Presidente de la República. Algunas voces, que parecen pensar que al país hay que gobernarlo mirándole la cara a las encuestas, se apresuran a pedir ajustes en el equipo de Gobierno y cambios en la política comunicacional. El Presidente, sin embargo, debe demostrar en esta instancia que tiene el liderazgo suficiente para indicarles a los chilenos el camino por donde habrá de transitarse para superar los obstáculos y no claudicar en su afán de hacer un gran Gobierno.

El programa está y el equipo también. De hecho, hemos visto cómo algunas autoridades sectoriales han dado a conocer algunos de los principales problemas estructurales que afectan a su sector e insinuado vías de solución. Es lo que ocurre en educación y también en salud. Hay ya iniciativas legislativas en materia de transportes, aunque aún no se vislumbra una solución integral al complejo problema del Transantiago.

El Ministro Kast, por su parte, ha sido pródigo en información

acerca de la situación de pobreza, denunciando de paso algunos de los problemas de las políticas de Gobierno. Recién empieza a incursionar, no obstante, en el terreno de las soluciones.

En muchos frentes, entonces, se trabaja con ahínco, pero lo que la población ha conocido hasta ahora son más bien los problemas.

En la etapa que viene, el Gobierno tiene que ser muy claro frente a la ciudadanía para explicar sus soluciones. Debe ser convincente y ha de tener, además, la capacidad política para lograr la aprobación de sus iniciativas. Una tarea nada fácil.

Es fundamental en esta tarea la fortaleza y reciedumbre del Presidente. Él y ningún otro es quien debe empoderar a sus ministros. Los cambios que hay que realizar en el aparato del Estado no son menores, pueden provocar reacciones de intereses de grupo que pretendan detenerlos y allí el apoyo es fundamental. Cada día queda más claro que la cuestión hoy día no es más de lo mismo. Aquello del quinto Gobierno de la Concertación queda definitivamente atrás. La identidad del Gobierno de Sebastián Piñera tiene que quedar marcada a fuego en las reformas que está realizando. Sin perjuicio del realismo político siempre necesario para que las reformas sean aprobadas, acá estamos frente a una tarea mayor.

Por profunda que sea la tarea de modernización del Estado que hay que llevar a cabo, las dificultades presentes pueden ser útiles para reflexionar acerca de los fundamentos de la labor del Gobierno. Esta administración no debiera olvidar que el ideario de la libertad pasa por un empoderamiento de la sociedad civil y del sector privado. La gestión del Estado, por eficiente que sea, debe ser limitada. Su objetivo debe ser servir y empoderar a los ciudadanos, no fortalecer a un aparato del Estado que persigue objetivos propios. Es en el ámbito privado de donde habrán de salir las mejores ideas y las más fructíferas iniciativas para cambiar la cara de este país. La intensidad de la tarea gubernamental, las energías que ella consume y la adrenalina que puede llegar a generar, no debiera hacer nunca olvidar dónde está el norte. **LyD**



The White House

Obama y el nuevo sistema de medición de la pobreza

En Estados Unidos también se lleva a cabo un áspero debate sobre cómo medir la pobreza. En el presente artículo escrito por Robert Rector, analista de Heritage Foundation, se cuestiona la decisión del presidente norteamericano en marzo pasado de alterar la metodología que se usaba oficialmente para medir el número de pobres.

El gobierno de Obama anunció la creación de un nuevo sistema de medición de la pobreza, que eventualmente reemplazará a la actual. Esta nueva medición, que tiene poco a nada que ver con la verdadera pobreza, servirá como herramienta de propaganda en la eterna búsqueda de Obama por "difundir la riqueza".

Con esta nueva medición, una familia será considerada "pobre" si su ingreso está por debajo de un cierto umbral de ingreso específico. Nada nuevo en esto, pero, a diferencia de los actuales estándares de pobreza, los nuevos umbrales de ingreso tendrán incorporada una cláusula de escala móvil: éstos aumentarán automáticamente en proporción directa a cualquier aumento en los estándares de vida del norteamericano promedio.

La actual medición de la pobreza mide el poder adquisitivo absoluto: cuántos bistecs

y papas uno puede comprar. La nueva medición medirá el poder adquisitivo comparativo: cuántos bistecs y papas uno puede comprar en relación con las demás personas. A medida que la nación enriquece, los estándares de pobreza aumentan proporcionalmente. En otras palabras, Obama utilizará un ardid estadístico para asegurarse de que "los pobres siempre serán ustedes", sin importar cuánto mejore su situación en términos absolutos.

Durante mucho tiempo, la izquierda ha promovido esta idea de una medición de la pobreza en constante aumento, la cual fue planteada a principios de la guerra y fue categóricamente rechazada por el Presidente Lyndon Johnson. No así el Presidente Obama, quien siempre busca expandir los horizontes de extrema izquierda de la política de EE.UU.

Esta extraña nueva medición de la pobreza arrojará resultados muy curiosos. Por

ejemplo, si el ingreso real de cada uno de los norteamericanos se triplicara mágicamente de la noche a la mañana, la nueva medición de la pobreza mostraría que no hay ninguna baja en los índices de "pobreza", puesto que el umbral de pobreza también se triplicaría. Con el sistema de Obama, la pobreza sólo puede disminuir si los ingresos de los "pobres" aumentan más rápidamente que los ingresos de todas las demás personas.

Otra paradoja de la nueva medición de la pobreza es que países como Bangladesh y Albania tendrán menores índices de pobreza que los Estados Unidos, aun cuando las condiciones de vida reales en esos países sean extremadamente malas. Haití probablemente mostraría un índice de pobreza muy bajo, al medirse con el sistema de Obama, ya que el terremoto dejó a gran parte de la población en una condición de indigencia generalizada.

De acuerdo con la medición de Obama, el crecimiento económico en sí no tiene impacto alguno en la pobreza. Desde comienzos del siglo XX, el ingreso de casi todos los norteamericanos ha aumentado siete veces, después de reajustarlo por inflación. Sin embargo, desde la perspectiva de Obama, este aumento en los ingresos reales no tuvo ninguna consecuencia en la pobreza, puesto que los salarios de aquellos que se encuentran en el punto más bajo de la distribución del ingreso no aumentaron más rápidamente que los ingresos de los que se encuentran en el punto medio.

¿Qué tiene que ver la medición de Obama con la pobreza real? No mucho. Para la mayoría de los norteamericanos, la palabra "pobreza" sugiere indigencia: una incapacidad de proporcionarle a la familia alimentos nutritivos, vestimenta y un techo razonable. Pero sólo una pequeña fracción de los 40 millones de personas clasificadas como pobres, según la definición actual de pobreza del gobierno, se ajusta a esa descripción. La mayoría de los pobres de Norteamérica vive en condiciones materiales que habrían sido consideradas confortables, e incluso prósperas, hace dos generaciones.

Los propios datos del gobierno muestran que el norteamericano típico definido como pobre (de acuerdo con la medición tradicional de la pobreza, pre Obama) posee dos televisores a color, servicio de cable o satélite, un reproductor de video o DVD y un equipo estéreo. También tiene un auto, aire acondicionado, refrigerador, cocina, lavadora y secadora de ropa y un microondas. Tiene acceso a atención médica. Su casa se encuentra en buen estado y las personas no viven hacinadas. Según su propio informe, su familia no pasa hambre y durante el año pasado dispuso de fondos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de su familia. Si bien



La medición de la pobreza de Obama define un nuevo objetivo nacional de lucha de clases y redistribución del ingreso.

la vida de esta persona no es opulenta, está lejos de la imagen desolada que transmiten los principales medios de comunicación y los políticos liberales.

Claramente, la "pobreza", según la actual definición del gobierno, tiene escasa relación con la "pobreza" entendida por el norteamericano promedio. La nueva medición de la pobreza de Obama llevará al extremo esta brecha semántica, inflando artificialmente el número de norteamericanos "pobres", y cortando todo vínculo entre el concepto de pobreza del gobierno y la privación incluso moderada.

En buen castellano, el nuevo sistema medirá la desigualdad del ingreso, no la pobreza. ¿Por qué no llamarlo tan sólo índice de "desigualdad"? Respuesta: porque el elector

norteamericano no está dispuesto a apoyar aumentos globales en beneficios sociales, déficits que aumentan desmesuradamente, ni aumentos de impuestos con el objeto de nivelar los ingresos. Sin embargo, si el objetivo de nivelar los ingresos se camufla bajo una lucha desesperada contra la pobreza, el hambre y una privación de proporciones, entonces el panorama político mejora. La nueva medición es un caballo de Troya de relaciones públicas, que oculta una agenda de "difusión de la riqueza" bajo la artimaña de combatir una real privación material, condición que es rara en nuestra sociedad. Ciertamente, la nueva medición de Obama, por ahora, no modificará beneficios ni ampliará los derechos a programas sociales. Pero la nueva medición sí establece una nueva filosofía de la pobreza. Por primera vez, el gobierno se propone definir la pobreza como un problema que nunca será resuelto por el sueño americano: un aumento general de los ingresos para todos los norteamericanos abarcando toda la sociedad a lo largo del tiempo. Por definición, ahora la pobreza sólo puede ser resuelta por el sueño de la izquierda: impuestos masivos a las clases altas y medias y redistribución a los menos prósperos. En efecto, la medición de la pobreza de Obama define un nuevo objetivo nacional de lucha de clases y redistribución del ingreso.

Por cierto, la "difusión masiva de la riqueza" ya está en marcha. Este año, el gobierno gastará alrededor de US\$ 900 mil millones en ayuda para los pobres y personas de bajos ingresos con comprobación previa de medios de vida, aproximadamente US\$ 9.000 para cada norteamericano perteneciente al tercio de bajos ingresos de la población. De acuerdo a la izquierda, está lejos de ser suficiente. La nueva medición de la pobreza utilizará el engaño para promover un estado benefactor mucho más grande. Contribuyentes, ¡cuidado!. **LyD**



Michael Barber, creador de la *Delivery Unit*:

“Medir los progresos de las metas sociales es vital,

de otra manera, ni los gobiernos ni los ciudadanos tendrán alguna idea de lo que se está haciendo con sus impuestos”

Michael Barber es un gran conocedor de políticas públicas y de la forma en que los resultados pueden llegar a ser los deseados a la hora de implementar las políticas.

Barber, profesor de la Universidad de Londres, experto en educación pública, fue consultor jefe de la Secretaría de Estado para los Estándares Escolares de Gran Bretaña, durante el gobierno del primer ministro Tony Blair, y se desempeñó entre 2001 y 2005 como director de la “*Delivery Unit*”, organismo que ayudó a diseñar y que es responsable de implementar programas prioritarios en salud, educación y políticas sociales.

El autor de “*Instruction to Deliver*” y

del reconocido Informe McKinsey sobre sistemas educativos, viajó a nuestro país para participar en el seminario “Gestión del cumplimiento de las prioridades gubernamentales”, organizado por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Universidad Católica el pasado 26 de agosto.

En su estadía en nuestro país –de menos de 12 horas– se reunió con el Presidente de la República y con los ministros de Educación y Segpres. En medio de esa intensa agenda,

Barber concedió una entrevista a nuestra revista, en donde analizó la importancia de la constante evaluación de los programas gubernamentales y entregó algunas claves para avanzar en materias sociales.

¿En qué términos exactos se puede definir el concepto “*Delivery*”? “*Delivery*” es el proceso mediante el cual los gobiernos aseguran que las principales metas del sector público sean alcanzadas de forma tan exitosa que los ciudadanos sientan y vean la diferencia.

¿Qué logros se alcanzaron con la *Delivery Unit* en Inglaterra?

Lo que hicimos fue enfocarnos en alrededor de 20 grandes metas e hicimos progresos significativos en casi la totalidad de ellas. Como ejemplo, la delincuencia cayó a su menor nivel desde 1981 (y ha continuado bajando), asimismo, las horas de espera en materia de salud se redujeron de forma tan importante que dejaron de ser una preocupación. De esta misma forma, las líneas del tren (que generaron un gran problema de políticas públicas en el Reino Unido durante la administración de Blair, ya que la frecuencia de los trenes se veía reducida por el desplome de hojas sobre las vías) se volvieron más confiables y las escuelas mejoraron su desempeño.

¿Qué opinión le merece la adopción de un sistema similar por parte del gobierno chileno?

Muchos gobiernos han adaptado la experiencia británica de instalar una Unidad de *Delivery* y, cuando lo hacen rigurosamente y designan un buen líder para la unidad, ésta funciona bien. Estoy seguro de que tendrá un buen desempeño en Chile.

¿Cuál es el valor de tener una constante evaluación de los programas gubernamentales, sobre todo en materia social?

Medir los progresos de las metas sociales es vital, de otra manera, ni los gobiernos ni los ciudadanos tendrán alguna idea de lo que se está haciendo con sus impuestos. Es importante, asimismo, usar buena información y múltiples fuentes de datos, tomando en cuenta que en el campo social ningún dato por sí mismo es perfecto.

Durante su gestión como consultor jefe de la Secretaría de Estado para los Estándares Escolares de Gran Bretaña

"Delivery es el proceso mediante el cual los gobiernos aseguran que las principales metas del sector público sean alcanzadas de forma tan exitosa que los ciudadanos sientan y vean la diferencia".

se lograron grandes avances en materia educacional ¿Cuáles son las claves para buenas políticas públicas en materia de educación y, en general, en el área social?

Nuestros progresos en educación fueron logrados a través del aseguramiento de un foco sostenido en un pequeño número de prioridades, mejorando especialmente la capacidad de lectura, escritura y de cálculo y reduciendo el fracaso escolar, a través de rendición de cuentas simultáneas de escuelas y profesores y, mediante la inversión en sus capacidades y habilidades.

Por sobre todo, nos aseguramos de que cada paso que tomamos fuera implementado correctamente, que cuando cometimos errores, éstos fueran corregidos rápidamente y que mantuviéramos el foco en dichas metas por varios años.

Asimismo, logros similares debieran alcanzarse en todo el sector social.

En materia de seguridad ciudadana, la actual administración ha tomado como uno de sus ejes programáticos la lucha contra la delincuencia ¿Qué acciones se tomaron en Inglaterra en este tema? ¿Qué línea debería seguir la política de seguridad ciudadana del gobierno?

Terminar con la delincuencia incluye tanto mejorar la calidad y efectividad de las policías como hacerse cargo de las causas de la criminalidad, tales como la falta de educación y la capacidad de la comunidad de atender los déficits vinculados con temas juveniles.

Además, involucra asegurar que el sistema de justicia criminal sea efectivo, que los casos judiciales sean bien administrados en los respectivos tribunales y que las medidas alternativas de cumplimiento de penas sean efectivas. Para quienes si cumplen condenas con reclusión, lo importante es que aprendan ciertas habilidades para que cuando salgan sean menos propensos a reincidir.

Los últimos indicadores muestran que en Chile la pobreza aumentó en los últimos tres años. Sin embargo, el gasto social creció en el mismo período ¿Hay aquí un problema de "delivery"? ¿Qué propuestas en materia de reducción de la pobreza puede plantear?

La pobreza es medida en muchas formas y tiene múltiples causas por lo que es difícil responder esta pregunta sin un conocimiento acabado del tema.

Sin embargo, uno pudiera esperar un aumento temporal de la pobreza en una recesión como la que vivió Chile y el resto del mundo durante el año pasado, por lo que aquí no habría un problema de "delivery".

De todas formas, la calidad de los servicios, incluyendo la entrega de beneficios, tales como la asesoría en el empleo, la educación y la capacitación y vivienda pueden tener un importante efecto y aquí podría haber un problema de "delivery", pero no puedo asegurarlo. **LyD**

COLUMNA



Modernización del Estado: **REFORZAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO Y LA IMPLEMENTACIÓN**

Claudio Seebach
Director de la División de Coordinación Interministerial
Ministerio Secretaría General de la Presidencia

En junio de 2008, Libertad y Desarrollo, junto a otros 10 centros de estudio y universidades, entre ellos Expansiva, el Centro de Políticas Públicas UC, ProjectAmerica, por mencionar algunos, se unieron de manera transversal para crear el Consorcio para la Reforma del Estado. Luego de un esfuerzo de más de dos años, se presentaron 19 estudios con propuestas de modernización del Estado donde participaron más de 40 investigadores y expertos. Dichos planteamientos fueron plasmados en el libro "Un mejor Estado para Chile", donde se planteó la necesidad de avanzar en reformas del Estado en los ámbitos de su conducción estratégica; de sus directivos y trabajadores; de la descentralización; y de la planificación, evaluación y control de la acción del Estado.

Hoy, muchos de los que participamos de esa iniciativa nos encontramos trabajando en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, quien ha planteado la necesidad de centrar la discusión de modernización precisamente en poder contar con un mejor Estado. Esto se traduce en mejorar la gestión estratégica del Estado, sobre todo desde el "centro de gobierno", fijando metas de resultado, plazos y contando con una evaluación constante, de manera de poder asegurar un cumplimiento de calidad, a tiempo y permanente de los compromisos.

Además de instalar una nueva forma de gobernar, en el discurso del 21 de mayo de 2010 el Presidente definió las siete grandes prioridades de su Gobierno: aumentar el crecimiento económico, generar más y mejores empleos, mejorar la seguridad ciudadana, derrotar la pobreza, mejorar la calidad de la educación y la salud y fortalecer la calidad de nuestra democracia.

La experiencia internacional muestra que para asegurar el logro de metas propuestas dentro de los plazos establecidos es necesario

fortalecer las capacidades de gestión del cumplimiento del Estado. Asimismo, se destaca la importancia de priorizar y focalizar la gestión en un conjunto acotado de metas con orientación hacia las necesidades de los ciudadanos. Esta necesidad se hace más evidente cuando existe una estructura fragmentada en el sistema público que dificulta la gestión, como es el caso de Chile.

Para lograr eso, y al igual que varios países desarrollados que han instalado unidades especializadas para esta función, como lo es el caso de Reino Unido donde Sir Michael Barber creó la "Delivery Unit", el Presidente Sebastián Piñera ha encargado al ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, la creación de la Unidad Presidencial de Gestión del Cumplimiento.

Esta unidad tendrá la tarea de apoyar a los ministerios responsables de los siete ejes prioritarios del Presidente en la formulación de sus planes de acción, identificar a tiempo problemas que dificulten el cumplimiento, determinar sus causas, generar instancias de coordinación interministeriales con actores claves y proponer soluciones. Todo esto con el sentido de urgencia que merecen las principales preocupaciones que hoy tienen los chilenos.

Coordinar y diseñar mejores políticas públicas es una obligación, pero una transformación profunda y modernizadora del Estado como la planteada por el Presidente Piñera cobra sentido cuando es posible cumplir con las prioridades de las personas y asegurar una correcta implementación. El Presidente ha sido claro en que el fin último es mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de los chilenos, manifestando su deseo de que los chilenos juzguen su mandato por los resultados y no sólo por las intenciones. Será tarea de la Unidad Presidencial de Gestión del Cumplimiento velar por la obtención de estos resultados. **LyD**



¿Apurando el freno monetario?

Ricardo Matte
Director del Programa Económico y Social de LyD

El Banco Central inició en junio pasado el proceso de normalización de su Tasa de interés de Política Monetaria (TPM), la que se mantuvo por diez meses en un nivel de emergencia de 0,5% para enfrentar la deflación del pasado reciente. Luego de dos alzas consecutivas de esta tasa, que la han elevado a 1,50%, el instituto emisor proseguirá con este proceso. La pregunta relevante es a qué ritmo lo hará. En concreto, ¿se mantendrá el ritmo reciente de alzas o se apurará el freno monetario?

Coincidiendo con una actividad y gasto interno que se encuentran en firme y clara recuperación, además de una serie de posibles registros altos de inflación influidos por consideraciones puntuales pero que se revertirán en el corto plazo, emergen cada día más voces recomendando un ritmo de normalización más rápido de la TPM, quizás esta vez con alzas de 0,75% la mayoría de las veces, para llevarla de aquí a fin de año a niveles en torno a 4,50%.

Se argumenta que las expectativas de inflación de los agentes económicos se podrían estar comenzando a desanclar y, frente a lo anterior, por los naturales rezagos de la política monetaria sobre la economía de al menos dos trimestres, sería preferible adelantarnos en la aplicación de la medicina monetaria contractiva.

Adicionalmente, se señala que el sector público tendrá una expansión significativa en los próximos trimestres como consecuencia de la reconstrucción post-terremoto y el escenario de deterioro externo que preveía el Banco Central en su último IPOM no se estaría dando con la intensidad asumida.

De aquí que para dichos analistas no sería prudente esperar que una posible desaceleración de la actividad mundial hiciera al menos una parte no menor de la necesaria contención de nuestra actividad futura, para hacerla así más sostenible en el tiempo.

Como resultado de un alza más rápida de la TPM, los mismos indican que el peligro para la economía chilena es que tendríamos una

llegada masiva de capitales externos al país y, para evitar un deterioro adicional de nuestra competitividad, nos veríamos quizás obligados a establecer nuevamente encajes a los flujos de capitales. Sin duda, una pésima señal para nuestra economía.

El descrito escenario, aunque no se puede descartar del todo como posible, no es el más probable que ocurra durante los próximos trimestres y, de aquí, que estimo prudente por el momento continuar algunos meses con alzas tan sólo de 0,50% en la TPM.

Lo anterior básicamente por dos razones:

1) Las actuales tasas de crecimiento del gasto interno, en especial de bienes durables, si bien se encuentran a niveles muy elevados en relación a doce meses, cuando se calculan las mismas respecto de dos años atrás, los aumentos son bastante más razonables. Sólo las próximas cifras nos darán una luz sobre el verdadero vigor de esta demanda. En la actualidad, la inflación subyacente está contenida y por cierto no hace aconsejable gritar ayuda a los "bomberos".

2) El mundo está plagado de grandes incertidumbres, especialmente en los países desarrollados. Asimismo, los mercados se encuentran muy nerviosos de un posible nuevo contagio por algún evento inesperado, lo cual gatillaría una nueva ola de aversión al riesgo y, con ello, se vería afectado el crecimiento de la economía mundial. Países como Chile serían muy afectados, porque el precio de productos como el cobre tendrían una caída no menor. En el mundo actual los equilibrios en los mercados son bastante inestables, bastando un solo cambio de percepciones sobre alguna variable para gatillar un nuevo "tsunami" financiero. Ignorar lo anterior sería de una ingenuidad enorme.

En resumen, el escenario más probable hace que lo más conveniente en materia de política monetaria por el momento sea ir con un paso firme y seguro subiendo subiendo la TPM en, digamos, 0,50% por algunos meses, pero no apresurarse y comenzar a "trota" con la misma, ya que podemos arriesgar un fuerte tropiezo y al final la medicina puede terminar siendo peor que la enfermedad. **LyD**



RADIOGRAFÍA AL PODER JUDICIAL: Tribunales Superiores Bajo la Lupa

Mientras en el mundo jurídico existe un amplio consenso en torno a la necesidad de crear y consolidar sistemas de información y el Poder Judicial ha hecho un esfuerzo en los últimos años para elevar sus estándares de transparencia y apertura a la ciudadanía, falta camino por recorrer en esta materia.

La mayoría de los ministros de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones en nuestro país son egresados de la Universidad de Chile -62% y 29%, respectivamente-, fueron designados fundamentalmente durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y son, en gran medida, mayores de 65 años.

Así lo demuestra el informe "Radiografía al Poder Judicial: Corte Suprema y Cortes de Apelaciones 2010", elaborado por Libertad y Desarrollo por segundo año consecutivo y en cuya versión actual se incluyó también a las Cortes de Apelaciones del resto del país.

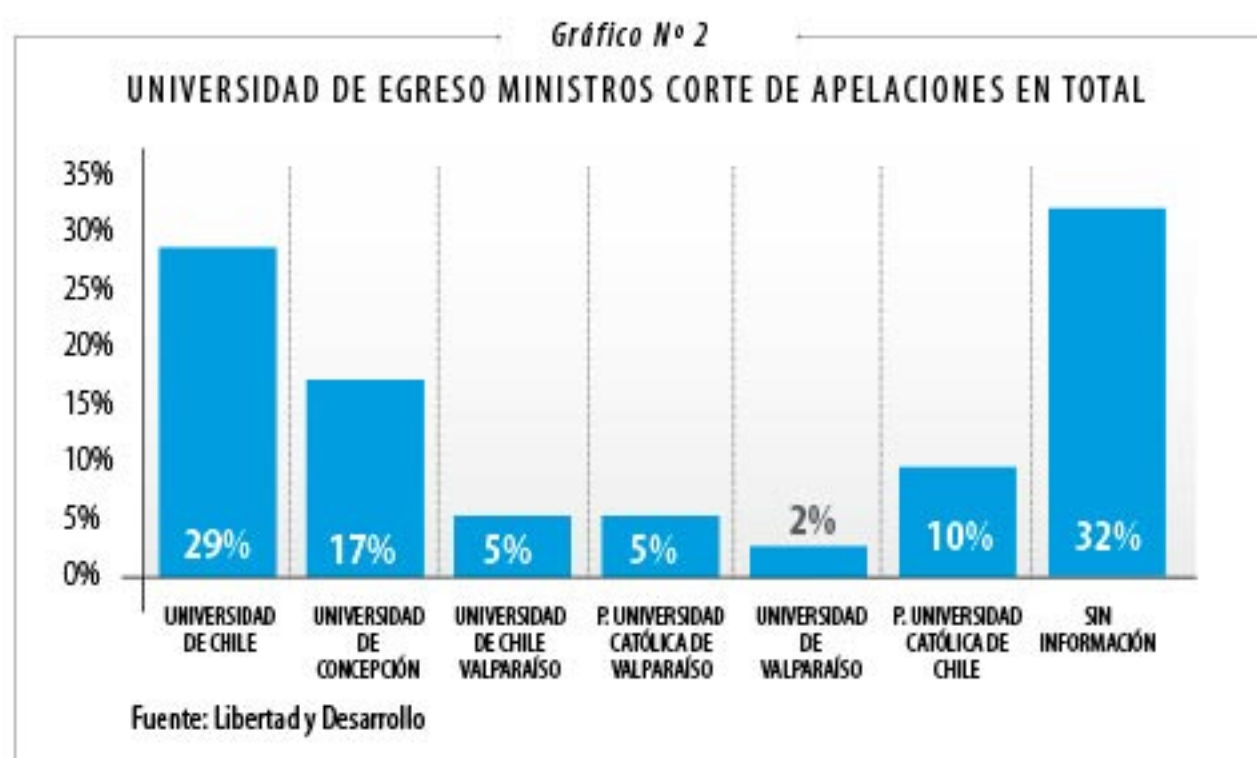
Dicho estudio fue realizado con el objetivo de comparar, medir y entregar información sobre el origen y la trayectoria de los ministros de los tribunales superiores de justicia del país.

Para lo anterior, al igual que en 2009, se midieron los siguientes parámetros: universidad de egreso de los ministros, el gobierno bajo el cual fueron nombrados, su número de años en el cargo, edades, cargos anteriores y la distribución de ministros por género.

UNIVERSIDAD DE EGRESO

En el caso de la Corte Suprema, predominan los ministros egresados de la Universidad de Chile, con un 62%. Muy de lejos siguen la Universidad de Concepción y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ambas con un 14% (Ver Gráfico 1).

La importancia de este parámetro radica en que permite medir la composición formativa de los jueces y la influencia



"El actual sistema de elección de ministros, combinado con la falta de alternancia en el poder político durante 20 años, podría ser un factor que mine fuertemente la independencia externa del Poder Judicial".

de los distintos enfoques académicos presentes en los tribunales superiores.

aparece siempre en los primeros lugares en variados rankings de prestigio.

Por lo anterior, el estudio enfatiza que resulta sorprendente que ninguno de los ministros haya egresado de la Universidad Católica de Chile, debido a que ella

En el caso de las Cortes de Apelaciones, resulta lamentable que la mayoría de los ministros no entregue información relativa a la universidad de egreso. La

Pese a que los ministros del Tribunal Supremo poseen poca experiencia en sus cargos, si se toma la variable edad no se trata particularmente de un tribunal "joven", lo que se explica por la existencia de una carrera judicial piramidal y jerarquizada, lo que hace que sea extremadamente rara la llegada de menores de 60 años al cargo.



peor situación se da en Concepción, donde ningún ministro publicó esos datos.

Dentro de los ministros cuya información estaba disponible, se aprecia que la Universidad de Chile vuelve a liderar la cantidad de ministros egresados, con un 29% del total. Posteriormente, se ubica la Universidad de Concepción, con un 17% (Ver Gráfico 2).

GOBIERNO BAJO EL CUAL FUERON NOMBRA DOS Y AÑOS EN EL CARGO

Un 67% de los ministros de la actual Corte Suprema fue nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet y tienen menos de cinco años en el cargo. A ellos le sigue

un 28% de ministros nombrados por el Presidente Lagos –con entre 5 y 10 años de experiencia en su cargo– y apenas un 5% fue nombrado por el Presidente Frei.

Así, dado que el 95% de los ministros fue designado por los dos últimos presidentes, la Corte Suprema actual es predominantemente "nueva" y, por consecuencia, poseen poca experiencia en sus cargos.

De esta forma, el actual sistema de elección de ministros, combinado con la falta de alternancia en el poder político durante 20 años, podría ser un factor que mine

fuertemente la independencia externa del Poder Judicial, enfatiza el informe.

Diferente es la situación en el caso de las Cortes de Apelaciones, donde un 35% fue designados durante el gobierno de Ricardo Lagos y la mayoría de los ministros (35%) cuentan con más de 10 años de experiencia.

Sin embargo, resulta preocupante que un 14% no señale la información sobre cuál fue su fecha de ingreso al cargo.

Con respecto a la edad de los ministros de la Corte Suprema, un alto número de ellos no la da a conocer, lo cual atenta contra

la transparencia, el control ciudadano y la adecuada medición estadística.

De aquellos ministros que entregan estos antecedentes, un 43% señala ser mayor de 65 años. De esta forma, pese a que los ministros del Tribunal Supremo poseen poca experiencia en sus cargos, si se toma la variable edad no se trata particularmente de un tribunal "joven".

Esto se explica ya que en el Poder Judicial chileno existe en general una carrera judicial piramidal y jerarquizada, lo que hace que sea extremadamente rara la llegada de menores de 60 años al cargo (Gráfico 3).

En tanto, en las Cortes de Apelaciones, donde un 31% de los ministros son mayores de 65 años, un porcentaje no despreciable (26%) es menor de 60 años (Gráfico 4). En este caso, un 27% de los ministros no entrega la información pertinente.

CARRERA FUNCIONARIA

El informe mide adicionalmente la trayectoria de los ministros al interior del Poder Judicial.

De esta forma, en la Corte Suprema, un 62% tuvo entre 4 y 5 cargos anteriores. En tanto, en las Cortes de Apelaciones un 30% se encuentra en ese nivel y un 59% tiene experiencia en 2 ó 3 cargos anteriores.

En cuanto a la distribución por sexo, un 76% de los cargos son ocupados por hombres en el caso del Tribunal Supremo. Misma situación se da en las Cortes Supremas, donde sólo un 33% son mujeres.

A modo de conclusión, la Radiografía establece que es lamentable lo incompleta

Gráfico N° 3

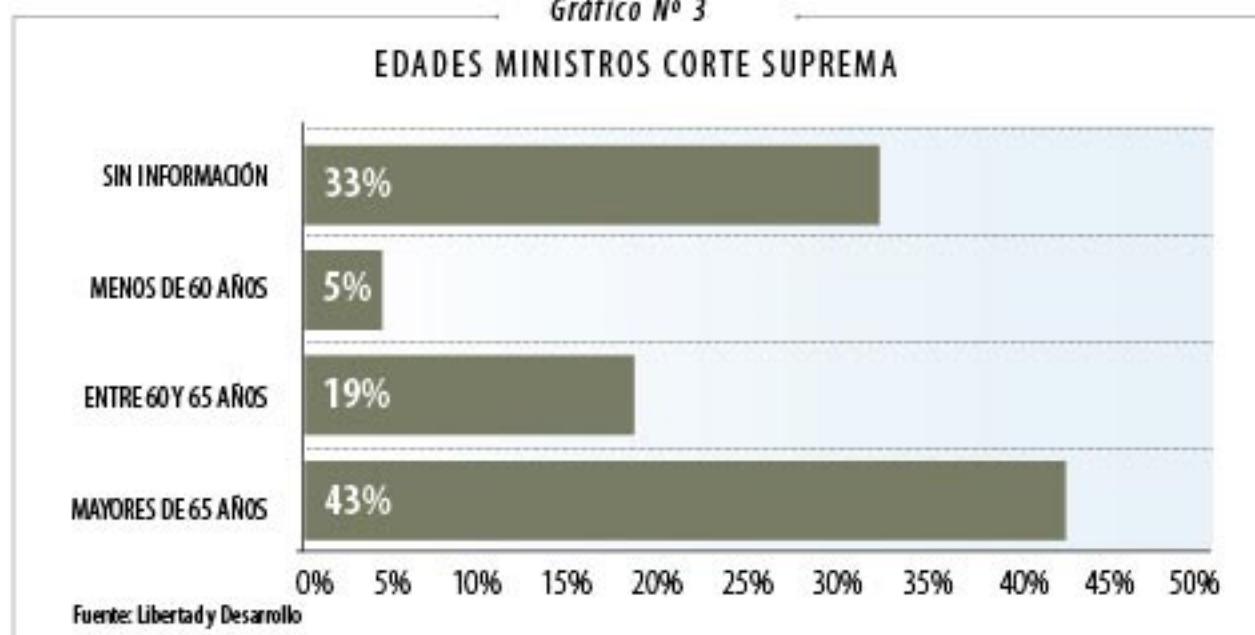


Gráfico N° 4



La "Radiografía al Poder Judicial: Corte Suprema y Cortes de Apelaciones 2010" establece que es lamentable lo incompleta que se encuentra la información disponible sobre los ministros, lo que hace difícil la realización de mediciones claras y precisas.

que se encuentra la información disponible sobre los ministros, lo que hace difícil la realización de mediciones estadísticas claras y precisas.

Según se observó, algunas lagunas se deben a la inexistencia de un formato estándar de curriculum vitae electrónico, lo que implica que la información incorporada a la web no es similar para todos. Según el estudio, esta situación dificulta la operatividad del

compromiso pro-transparencia de la Judicatura chilena y deja en evidencia que, pese a los avances logrados en comparación con años anteriores, aún falta mucho por avanzar en información y rendición de cuentas a la ciudadanía.

La información para la realización del estudio fue recogida a través de la página web del Poder Judicial y fue complementada con datos entregados por la Dirección de Comunicaciones de la entidad. **LyD**

Un Giro en la Política Indígena: Cambios en la Entrega de Tierras

La luna de miel entre el Gobierno y las poblaciones mapuches violentas se terminó el hace algunos días. Con cerca de 15 fundos tomados, cortes de caminos, ataques incendiarios y manifestaciones en apoyo a los mapuches que están en huelga de hambre, se volvió a encender La Araucanía. La reformulación del sistema de entrega de tierras por parte del nuevo Gobierno es un buen primer paso para avanzar en una integración pacífica de las comunidades indígenas.



Treinta y seis casos de violencia indígena se pueden contabilizar en La Araucanía este primer semestre.

Durante el final de la administración Bachelet (enero -11 de marzo) se contabilizan 18 casos, los mismos que durante la etapa de "luna de miel" del nuevo Gobierno. La diferencia está en que los primeros ocurrieron en dos meses, mientras que los segundos, a lo largo de cinco meses, evidenciando un mayor grado de conflictividad durante el Gobierno anterior.

El momento crítico se vivió el hace algunos días, cuando se registró una veintena de casos, además de la huelga de hambre de 31 presos mapuches que comenzó el 12 de julio en la cárcel El Manzano. Piden terminar con la aplicación de la ley anti-terrorista, la puesta en libertad de los presos mapuches y exigen una serie de reivindicaciones de tierras. Sin embargo, lo que llama la atención es que quienes reclaman provienen de comunidades que ya se han visto beneficiadas con tierras directa o indirectamente, quedando así en evidencia las deficiencias que existían en

la política indígena diseñada durante los Gobiernos de la Concertación.

Esta situación se genera porque, pese a los anuncios de las administraciones anteriores de que se aplicaría la política de "fundo tomado fondo no comprado", en la realidad esto no ha sido así.

Un documento elaborado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) ha evidenciado que más de la mitad de los mapuches que se encuentran hoy en prisión han recibido tierras. De los 40 mapuches que están imputados, 24 provienen de comunidades beneficiadas "hasta tres veces con terrenos comprados por la Conadi"[i], además de que gran parte de ellos "están acusados de planificar, dirigir y ejecutar ataques armados e incendiarios contra predios o agricultores"[ii]. En otras palabras, la política indígena ha estado marcada por una gran discrecionalidad, centrándose en la idea de "tierras por paz", lo que ha derivado en la frustración de las comunidades pacíficas y en un aumento sostenido de la violencia.

El conflicto por la propiedad de las tierras es lo que está detrás de la violencia indígena. Reclaman derechos ancestrales, hablan de una "deuda histórica" y piden el reconocimiento del "pueblo mapuche" y plenos derechos sobre sus tierras actuales y la devolución de aquellas que les "debieran pertenecer". En este contexto, la política de tierras adoptada por el Gobierno es clave: no pueden seguir siendo beneficiadas las comunidades violentas y es fundamental un proceso transparente.

Hasta ahora, la adquisición de terrenos se ha transformado en un verdadero "mercado negro", en donde se ha beneficiado a quienes no debía hacerse; los predios entregados no son ocupados por los beneficiarios, incluso a veces son arrendados a sus dueños anteriores; se han pagado sobrepagos y hay partes del presupuesto sin rendir.

LOS ANUNCIOS DEL GOBIERNO

En política indígena se necesita un cambio urgente. No sólo por los hechos de violencia que se acumulan cada año y que atentan

contra la seguridad de La Araucanía -minando el Estado de Derecho-, sino que también por la falta de prolijidad en la entrega de tierras, que evidencia serias irregularidades en el control del proceso y el traspaso de los predios.

Para evitar esta situación, el Ministro de Mideplan, Felipe Kast, anunció la semana pasada que se reenfocherà la política de tierras con tres ejes principales:

1.- Fomentar la entrega de tierras a través del artículo 20 letra A[iii] de la Ley Indígena de acuerdo a ciertos requisitos, como por ejemplo la historia de la comunidad, el número de personas, la situación económica, entre otros.

2.- Entrega de subsidios asociados a un programa de apoyo productivo y evaluados por un comité.

3.- Poner fin al arriendo de las tierras a dueños anteriores.

De esta forma, se busca generar un mayor control en el proceso de entrega de tierras, el que a partir de ahora se regirá bajo nuevas normas. Privilegiando el mecanismo de subsidio y con un comité evaluador que debe revisar cada caso de compra directa, se va perfilando una política de tierras que apunta a mayor transparencia y a terminar con los beneficios para comunidades violentas. Lo que hasta ahora no se había hecho.

A través del mismo sistema de puntajes establecido en la ley, las comunidades o personas pueden postular al subsidio previo llamado a concurso por parte del Gobierno. La novedad en este sistema es que la adjudicación de éstos irá acompañada de programas de apoyo técnico productivo que les permitirá utilizar diversas herramientas del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), con lo que se espera terminar con el

arriendo y subutilización de los terrenos.

En cuanto a la compra directa, ésta se decidirá caso a caso y serán revisados por un comité conformado por representantes de los ministerios de Hacienda, Agricultura y Planificación. Se respetará el tope máximo de 12,7 hectáreas por familia, además de contar con al menos dos tasaciones acorde a la valoración del mercado, de la condición del suelo y del derecho de aguas. Lo que se busca es terminar con los sobrepagos por los terrenos, cuyos valores en la zona del conflicto aumentaron hasta un 826% entre 1994 y 2009, según datos entregados por el Gobierno.

CONCLUSIONES

Es fundamental que los pueblos originarios cuenten con las herramientas necesarias para poder superar su condición social. Los mayores índices de pobreza se encuentran en las poblaciones indígenas, por lo que un convenio de apoyo productivo es un primer paso para mejorar su calidad de vida.

No se debe olvidar que la región de La Araucanía, zona donde habita la mayor cantidad de población indígena, es la más pobre del país, con un índice de 27,1%, superando por 12 puntos el promedio nacional de 15,1%, según datos de la encuesta Casen 2010.

Privilegiar el mecanismo de subsidios entrega mayor credibilidad al sistema. Sin embargo, es necesario tener en cuenta quién otorgará dicho subsidio, ya que hasta el momento éste lo entregaba el director de Conadi, lo que dejó espacios para la discrecionalidad. Un comité de expertos podría ser una buena manera de transparentar la toma de decisiones.

En cuanto a la compra directa que se contempla en el plan, es necesario ser prudente con ella, ya que se presta para irregularidades que pueden fomentar un

clima de violencia mayor. No hay que olvidar que los grupos radicales han buscado siempre la utilización de este mecanismo.

Ahora, el problema coyuntural es que las comunidades indígenas violentas, que se habían mantenido expectantes ante los anuncios del Gobierno, han retomado sus procesos reivindicatorios, por lo que los cambios en materia de tierras son fundamentales. No hay que olvidar que las comunidades que han recibido mayores beneficios son justamente las más violentas. De un total de 2.900 comunidades, sólo 27 tienen demandas territoriales, es decir, un 0,9%. Es inexplicable que la política indígena concertacionista haya favorecido, principalmente, a esta minoría conflictiva en desmedro de la mayoría pacífica.

En este contexto, los cambios en la política de tierras muestran un avance en cuanto a mejoras en la situación de los pueblos originarios y al proceso de toma de decisiones de las adjudicaciones. Una comunidad con antecedentes de violencia no recibirá beneficios, terminando así con la idea de "tierras por paz".

Un punto que no hay que olvidar es que la mayor parte de los mapuches viven en las zonas urbanas (70%). Es cierto que aquellos que habitan en áreas rurales se encuentran en desventaja y que la falta de acceso, educación, salud, entre otros, influye directamente en su precaria situación.

Estas modificaciones en la política indígena son un buen primer paso para empezar a integrar a los pueblos originarios, con los incentivos adecuados, y demostrarles que de ellos depende mejorar su situación social. El Gobierno les está entregando las herramientas, pero son ellos quienes deben darles un buen uso. **LyD**

[i] Iván Fredes. "Más de la Mitad de los Mapuches Imputados por hechos Violentos han sido Favorecidos con Tierras". Diario El Mercurio, 25 de julio 2010.

[ii] Idem.

[iii] Ver Ley Indígena 19.253.

COLUMNA

Tras la muerte de un defensor de la libertad: IN MEMORIAM MANUEL F. AYAU

Carlos F. Cáceres

Presidente del Consejo de Libertad y Desarrollo

El pasado 4 de agosto falleció Manuel F. Ayau, destacado empresario guatemalteco y fundador de la Universidad Francisco Marroquín.

Tuve la grata oportunidad de conocer a Manuel Ayau en el año 1979 cuando, siendo él Presidente de la Sociedad Mont Pelerin, le correspondió dirigir la Reunión Regional, realizada en Madrid, que fue la primera a la cual fui invitado a participar.

Hacer un recuento de las numerosas actividades y realizaciones del querido amigo Manuel es muy necesario para efectos de que ello sirva como ejemplo a nuevas generaciones que deben inspirar iniciativas fundadas en el valor moral de la libertad.

Manuel Ayau fue inicialmente un destacado empresario que volcó su iniciativa y voluntad para crear y llevar adelante empresas que fueron de beneficio para su país. En ellas perfiló las implicancias que para la vida del emprendimiento tiene un orden social de libertades.



Su amplio espíritu no se agotó en dicha actividad. Manuel sintió en todo momento la necesidad de generar espacios para la formación de juventudes en las distintas áreas del saber. Su gran obra, en el área educacional, es la Universidad Francisco Marroquín, hoy en día, una de las más prestigiadas de Guatemala como también en el ámbito internacional. No sólo le dio estructura a esta obra fundacional, sino también perfiló la referencia de principios y valores que debían orientar las tareas académicas.

Supo reunir en su seno a un grupo importante de empresarios que colaboraron en esa iniciativa y una de sus preocupaciones esenciales fue contar con un cuerpo académico de excelencia en el cual se desempeñan hoy en día muchos de sus egresados.

La Reunión General de la Sociedad Mont Pelerin correspondiente al año 2006 se realizó en Guatemala, precisamente en la sede de la Universidad. Pudimos apreciar en esa ocasión la íntima satisfacción que sentía Manuel al observar que convergían en el desarrollo de esa reunión sus principales inquietudes referidas a la proyección del valor de la libertad, como también los requerimientos de una educación superior fundada en sólidos principios. Fuimos en esa, como en otras reuniones de la Sociedad, testigos de su participación tanto en la presentación de trabajos específicos, como también en los debates que estos y otras investigaciones generaban. En cada una de esas oportunidades Manuel dejaba registrado sus conocimientos, sólidas convicciones y su fuerza interior para expresar con vehemencia sus ideas, en las cuales revelaba consecuencia entre pensamiento y acción.

Manuel Ayau, en su carácter, expresó sabiduría y un sentido de irónico humor. Hombre simpático y de una calidad humana excepcional, integró, junto a su mujer Olguita, una muy destacada familia en la cual una de sus hijas hizo profesión religiosa.

Al momento de su deceso queremos rendirle un sentido tributo al coraje que imprimió en cada una de sus acciones como empresario y como formador de juventudes en la defensa del valor moral de la libertad, sin la cual la naturaleza trascendente del ser humano no puede alcanzar su plena realización.

Su vida fue un ejemplo y un testimonio para que nuevas generaciones tomen posiciones y asuman con voluntad la defensa de principios y valores en los cuales se fundamenta la naturaleza humana en su búsqueda del destino superior. **LyD**



CONGRESO

- ★★★★★ Digno de aprobación sin modificaciones.
- ★★★★☆ Digno de aprobación con modificaciones menores.
- ★★★☆☆ Requiere mejoras sustanciales.
- ★★☆☆☆ Debe ser reformulado íntegramente.
- ★☆☆☆☆ No debiera ser aprobado (idea de legislar objetable).

"Policía" Municipal



Se propone que los vigilantes municipales puedan, bajo estricto control de Carabineros, portar armas legalmente inscritas y, eventualmente, hacer uso de ellas en las mismas condiciones de exención de responsabilidad penal que la Policía de Investigaciones. El proyecto va en la dirección correcta al favorecer la operatoria de unidades de vigilancia municipal, con armas legalmente inscritas y bajo la fiscalización de

Carabineros de Chile. Además, establece (tal como ya existe para la Policía de Investigaciones) una exención de responsabilidad penal, tanto para carabineros como para los vigilantes municipales, cuando deban hacer uso de las armas en el cumplimiento de sus funciones. La idea, si bien puede parecer audaz, responde a una necesidad apremiante de contribuir a reducir los niveles de delincuencia.

Derecho real de conservación



Se trata de una moción que permitiría a ciertos órganos del Estado o a una fundación o corporación, celebrar -con el dueño de un predio, cuya conservación fuera de interés para el medio ambiente (un bosque, por ejemplo)- un contrato para establecer un derecho real que, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, facultaría al titular de este derecho (ente público o privado) para establecer todas las restricciones o medidas de conservación que el proyecto de ley propone y que son prácticamente "infinitas" (prohibiciones de construir, de transitar, restricciones de uso, prohibición de efectuar turismo, obligación de limpieza y mantenimiento y muchas otras).

El proyecto tiene una formulación compleja, porque está diseñado para ejercer facultades como titulares tanto por los órganos del Estado sometidos a normas de derecho público, como por personas jurídicas de derecho privado, que están al margen de ese régimen. Al parecer, sólo tendrían interés en la celebración de contratos de esta naturaleza, personas jurídicas con capacidad para financiar las acciones de conservación y con una finalidad ambiental según sus estatutos. Nótese que este derecho real de conservación podría establecerse en forma perpetua (es decir, gravando a perpetuidad el predio), lo que no parece consistente con el derecho privado nacional.

Acceso a internet: ¿garantía constitucional?

La reforma constitucional propone incluir una nueva garantía de acceso universal a Internet. Si bien esto puede tener un factor de tentación popular y tecnológica, hay que admitir que la Constitución no es un instrumento de regulación específica, sino que es el cuerpo jurídico que representa los grandes consensos nacionales, donde se consagran los principios más importantes que han de respetarse, las reglas del juego que la sociedad se ha dado para avanzar hacia lo que encuentra relevante y la manera de ejercer y, sobre todo, limitar el poder estatal.

Desde esta perspectiva, constituir una garantía constitucional de acceso universal a internet no va en la línea de lo que es, puede y debe ser una Constitución

llamada a describir las grandes directrices, los pesos y contrapesos del Estado, los derechos fundamentales y no la especificidad que lleva implícita la regulación propuesta.

El problema con este tipo de reformas es que es que, por una parte, generan el descrédito de las Cartas Fundamentales -llenas de pretensiones y declaraciones que no se cumplen- y, por otra, que tienden a producir el efecto inverso al querido por sus autores puesto que cristalizan la actividad que pretenden garantizar. Así, la proposición parece desproporcionada por exceder el campo propio de la normativa constitucional, sobre todo si la ley es suficiente para establecer regulaciones en esta materia.





SEMINARIO DE COYUNTURA CON MINISTRO DEL INTERIOR, RODRIGO HINZPETER

Con el objetivo de conocer en detalle los primeros meses del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y los desafíos que se vienen por delante, el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter fue el invitado especial al Seminario de Coyuntura de LyD. Hinzpeter hizo una evaluación de lo que significó el terremoto para el Gobierno y de las metas para lograr superar la catástrofe.

Por su parte, el consejero de LyD, Hernán Büchi, entregó balances y proyecciones de la economía nacional e internacional para el 2010 y el 2011.

El Consejero de LyD, Hernán Büchi; Rodrigo Hinzpeter, Ministro del Interior y Carlos F. Cáceres, Presidente del Consejo de LyD, durante el seminario.

LUIS LARRAIN EN MESA DE EXPERTOS EN POLITICA EXTERIOR

El Director Ejecutivo de LyD, Luis Larrain, participó en la Mesa de Expertos "Los valores en la Política Exterior" convocada por Juan Emilio Cheyre, Director Fundador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. La actividad contó con la presentación de Beate Neuss, Vicepresidenta de la Fundación Konrad Adenauer y Profesora de Política Internacional del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Técnica de Chemnitz, Alemania.



Juan Emilio Cheyre, Director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica junto a Luis Larrain y la expositora Beate Neuss.



Rodrigo Troncoso, coordinador del Programa Social de LyD.

RODRIGO TRONCOSO ASUME COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA SOCIAL

El ingeniero comercial y doctor en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo Troncoso, se integró al Programa Económico y Social de Libertad y Desarrollo.

El profesional tiene amplia experiencia docente, como profesor asistente de la Universidad Diego Portales.

A su vez, en agosto se produjo la fusión de los programas económico y social. Ricardo Matte encabezará este programa, quedando a su cargo el análisis de todos los temas macroeconómicos; Susana Jiménez, economista senior, seguirá a cargo de los temas microeconómicos y Troncoso quedará a cargo de lo social, con especial énfasis en educación, apoyado por las investigadoras Rosita Camhi y Paulina Henoch.

ECONOMISTAS DE LYD INTEGRAN COMISIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA



Ricardo Matte.



Susana Jiménez.

Los economistas Ricardo Matte y Susana Jiménez fueron convocados por el Ministerio de Hacienda para integrar distintas comisiones. Matte, Director del Programa Económico y Social de LyD, integra el grupo de expertos convocados por el Ministerio de Hacienda para obtener una estimación del PIB tendencial a ser utilizado en el cálculo del Balance Estructural del sector público. En tanto, Susana Jiménez integra el Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre, el que se utiliza para la estimación de los ingresos estructurales del sector público, lo cual es fundamental para la formulación del proyecto de ley de presupuestos.

TALLER MACRO CON JORGE DESORMEAUX

El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Desormeaux, analizó el panorama económico nacional e internacional en un taller realizado el jueves 29 de julio. En su exposición, entregó proyecciones de crecimiento para Chile y el mundo y se detuvo en los principales riesgos y fortalezas para el 2011.

El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Desormeaux junto a Carlos F. Cáceres, Presidente del Consejo de LyD.



VISITA DEL MINISTRO JEFE DE GABINETE DE HONDURAS

El Ministro Jefe de Gabinete de Honduras, Octavio Sánchez Barrientos visitó LyD donde fue recibido por el Director Ejecutivo, Luis Larrain. Interesado en la experiencia chilena en las concesiones de obras públicas, también aprovechó la ocasión para interiorizarse acerca del tema.

El Ministro Jefe de Gabinete de Honduras, Octavio Sánchez Barrientos, junto al Director Ejecutivo de LyD, Luis Larrain.